

## **Señas de Caín. Los discursos de la violencia política entre dictadura y democracia (1962-1982)**

**Javier Muñoz Soro**  
**Universidad de Cagliari**

Si hubo un tema que estuvo siempre presente, de manera a menudo más implícita que explícita, en el pensamiento y la acción política durante los años de crisis del franquismo y de transición a la democracia, ése fue el de la violencia. Difícilmente podría haber sido de otra manera, considerando la naturaleza represiva de la dictadura franquista, que nunca renunció a la legitimidad de su violencia de origen y para la cual, como afirmaba Aranguren volviendo al revés la famosa sentencia de Clausewitz, la política no era sino la continuación de la guerra con otros medios. Y considerando además que la transición, como todo momento histórico de cambio, ofrecía una oportunidad de acción favorable al uso de la violencia para imponer los respectivos proyectos políticos. Sin embargo, el proceso español suele destacarse por su carácter pacífico, fruto del pacto entre grupos dirigentes de la oposición y del régimen, y del consenso de amplios sectores de una población deseosa de paz y orden, relegando la violencia a grupos residuales de la extrema izquierda y derecha sin respaldo social (a excepción del País Vasco). La izquierda habría renunciado mucho tiempo atrás al lenguaje de la revolución que tan funestas consecuencias había tenido en los años treinta y la derecha, derrotado el fascismo, renovado profundamente el mundo católico y aflojadas las rígidas tensiones que sostenían el *status quo* durante la guerra fría, se habría convencido de forma simétrica de la imposibilidad de mantener el poder a la fuerza. Pero, pese a todo ello, la violencia nunca dejó de estar presente ni en los estertores del franquismo ni en la transición a la democracia, cuando Manuel Vázquez Montalbán escribía que «el miedo es el tercer personaje de nuestra realidad política»<sup>1</sup>.

Es cierto que los partidos históricos de la izquierda habían renunciado mucho antes a la lucha armada y optado por una salida pacífica de la dictadura: el PSOE desde su reorganización entre 1944-1946 y el PCE una década después, cuando formuló su política de reconciliación nacional y

---

<sup>1</sup> VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, “Violencia latente”, *Triunfo*, 765 (24-IX-1977).

de huelga nacional pacífica. Pero también es cierto, como ha señalado Abdón Mateos, que ello no significaba la desaparición dentro de la cultura política de la izquierda de una larga tradición de violencia revolucionaria, ni de una estrategia de “oportunismo revolucionario” que no descartaba totalmente el recurso a la acción armada, al menos con carácter defensivo ante la represión franquista<sup>2</sup>. Todavía en 1972 Santiago Carrillo declaraba ante el VIII Congreso celebrado en París que los objetivos de la huelga nacional pacífica iban mucho más allá de paralizar el país, pues suponían «una forma moderna de levantamiento popular y nacional» que no renunciaba «a la violencia revolucionaria» (algo que hoy no puede dejar de sonar paradójico)<sup>3</sup>. El afianzamiento del régimen desde 1953 cerró durante una década la vía a una salida pacífica y política de la dictadura, haciendo que reverdecieran una vez más las lánguidas esperanzas en un golpe monárquico, un atentado a Franco o un levantamiento popular. Las huelgas asturianas, las movilizaciones estudiantiles, la disidencia pública de los intelectuales y la reorganización del movimiento obrero abrieron de nuevo, a partir de 1962-1963, el horizonte de la lucha política.

Los años sesenta se abrieron bajo el signo ambiguo de cierta distensión internacional pero también del miedo a una tercera guerra nuclear, del fin de las ideologías y de la pasión ideológica exacerbada, de la paciencia como ética política y de la impaciencia revolucionaria, del pacifismo *hippie* y de la reflexión sobre la violencia en la “nueva izquierda” radical. Si esto era así en Europa y el resto del mundo occidental, puede suponerse hasta qué punto las excepcionales circunstancias en las que sobrevivía la izquierda española propiciaron aún más el carácter contradictorio de sus posiciones respecto a la violencia política. De manera que, por ejemplo, en la izquierda cristiana la repugnancia moral hacia la violencia podía ser compatible con un esfuerzo en la comprensión y solución de sus causas, igual que las teorías sobre la necesidad e inevitabilidad de la violencia típicas de la “nueva izquierda” no impedían una valoración política negativa de sus consecuencias prácticas para España y los países desarrollados. No hubo una actitud única que se mantuviera constante en el tiempo, sino varias que además se sucedieron hasta el final de la dictadura e, incluso, más allá, expresión de distintas culturas políticas y tendencias ideológicas, pero también de respuestas matizadas ante distintos fenómenos, las cuales coexistían no siempre de manera armónica dentro de esas mismas culturas políticas. Veremos que legitimación, justificación, comprensión, explicación, rechazo, condena y otras actitudes aparecieron simultánea y sucesivamente en el discurso de la izquierda antifranquista. Así, por ejemplo, Recalde ha distinguido entre varias posiciones sobre la violencia dentro del Frente de Liberación Popular (FLP), desde la licitud de la utilización de la violencia política en algunas situaciones, o de utilizarla

---

<sup>2</sup> MATEOS, Abdón, “El final de la cultura de la violencia de la izquierda española”, *Leviatán*, 84 (verano 2001), pp. 185-189.

<sup>3</sup> VILAR, Sergio, *Historia del antifranquismo, 1939-1975*, Barcelona, Plaza y Janés, 1984, pp. 428-429.

«en nuestra situación», a la posición no ya sobre la licitud, sino sobre la oportunidad política de su uso<sup>4</sup>. La actitud del franquismo era, sin duda, mucho más neta: de legitimación de su propia violencia y condena de la contraria.

Si, como decíamos, la década de 1960 había comenzado bajo el signo de la distensión y del pacifismo de Juan XXIII, Kennedy, Kruschev, Gandhi o Luther King, en pocos años el pacifismo como ideología entró en crisis en todo el mundo occidental. En España personas procedentes de la organización pacifista católica Pax Christi como José Ramón Recalde y Alfonso Carlos Comín pasaban a militar en el FLP, que se definía como «una organización revolucionaria. Entendemos por Revolución la toma violenta del poder por las clases trabajadoras»<sup>5</sup>. En sus recientes memorias, Recalde ha escrito que «la negación absoluta de esa vía violenta había estado presente años antes, como conflicto moral, en algunos de nosotros, los que entramos en el Frente desde el cristianismo y que, por ejemplo, desde el movimiento Pax Christi nos sentimos atraídos por un pacifismo radical». Allí se había encontrado con José Luis Álvarez Emparanza, luego *Txillardegui*, uno de los fundadores de ETA en 1958, «y es que, para pasar de la no violencia a la violencia no hay como desarrollar el razonamiento pacifista, encuadrándolo con el rigor de la ética de los principios: pronto enfrentados a las duras realidades que encuentra, corrige uno su misión en el mundo, pasando de la paz a la guerra, convirtiéndose, de Gandhi, en la mano justiciera de Dios»<sup>6</sup>. Otro escritor procedente del apostolado católico y ahora militante del FLP, Luciano Rincón, criticaba el aristocratismo de Gandhi porque «pedir la paz sin condenar las formas originadoras de violencia es condenar definitivamente a los pueblos oprimidos»<sup>7</sup>.

El intelectual católico más influyente entre los cristianos de izquierda, Emmanuel Mounier, ya había afirmado que resultaba una hipocresía estar contra la violencia, «como si no se realizara de la mañana a la noche actos de violencia blanca, como si no participáramos en los asesinatos difusos de la humanidad». Porque pensar demasiado en los actos de violencia «impide ver que hay más a menudo estados de violencia –como aquel en el que están parados, mueren y se deshumanizan hoy día, sin barricadas, en el orden, millones de seres–, e impide ver que, lo mismo que el tirano es el verdadero sedicioso, la verdadera violencia, en el odioso sentido de esta palabra, es la permanencia del régimen»<sup>8</sup>. Una idea que pasó a las nuevas generaciones españolas a través de algunos intelectuales católicos con gran prestigio entre éstas, como Ignacio Fernández de Castro, quien

---

<sup>4</sup> RECALDE, José Ramón, *Fe de vida. Memorias*, Barcelona, Tusquets, 2004, pp. 131-132.

<sup>5</sup> GARCÍA ALCALÁ, Julio Antonio, *Historia del “Felipe” (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista Revolucionaria*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 170-171; CASTRO MORAL, Lorenzo, “La izquierda radical y la tentación de las armas”, en J.M. Roca (ed.), *El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992)*, Madrid, Los libros de la Catarata, 1994, pp. 133-154.

<sup>6</sup> RECALDE, José Ramón, *op. cit.*

<sup>7</sup> RINCÓN, Luciano, “La paz, concepto equívoco”, *Cuadernos para el Diálogo*, 33-34 (junio-julio 1966).

<sup>8</sup> MOUNIER, Emmanuel, *El compromiso de la acción*, Madrid, ZYX, 1967, pp. 91 y 115-116.

había defendido ya en 1959 que «desde un punto de vista cristiano, la legitimidad del empleo de la violencia es indudable cuando no existe otro medio para restablecer la justicia» por más que, «personalmente, cada día que pasa creo más en la tremenda eficacia de los medios pacíficos»<sup>9</sup>. José Luis López Aranguren teorizaba pocos años después una “moral dialéctica” que tuviera en cuenta la necesidad de “historizar” la violencia frente a los juicios morales absolutos, como había escrito Merleau-Ponty en su influyente *Humanismo y terror*. Y siguiendo al filósofo norteamericano Rollo May descalificaba el pacifismo de la contracultura *hippie* como evasivo, frente a la violencia entendida como sana reacción para trascender las fronteras del yo y como síntoma de una situación de impotencia de la que se intentaba salir.

En *Violencia y moral* (1969), un texto presentado el año anterior en el coloquio organizado en Venecia por el Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos (MIIC-Pax Romana) sobre el tema *Étique de la Révolution et Injustice sociale*, Aranguren escribía que «la violencia, en el plano político, está siempre, inevitablemente, en ejercicio y que, por tanto, no se trata de decidir *simpliciter* sobre su legitimidad, sino de ver cuándo, en concreto, es legítima, y cuando no». El origen de todo poder es violento, pues «la violencia se halla en el origen mismo del Poder del Estado, que es inseparable de él», aunque «el régimen, una vez establecido, se autolegitima con arreglo a un orden jurídico» (en esas andaba todavía el franquismo). «En suma, la historia política se manifiesta como la historia de una sucesión ininterrumpida de violencias», y la violencia aparece así como «inevitable al servicio del cambio, inevitable al servicio del inmovilismo». En cuanto a la responsabilidad última de la violencia y del terror, para Aranguren era evidente que «desde el punto de vista de una auténtica democracia puede apuntarse, en cambio, a una clara responsabilidad moral del Estado. Cuando la violencia, saliendo de la ambigüedad que hemos descrito, se convierte en inequívoca, podemos estar seguros de que, salvo casos aislados sencillamente criminales, estamos en presencia de una culpable rigidez inmovilista del aparato estatal, inepto para responder a tiempo a las reivindicaciones originariamente justas».

Sobre la posición pública de los intelectuales ante la violencia, Aranguren señalaba que respecto al Tercer Mundo, y en especial Latinoamérica, éstos tendían a pensar que la confluencia de un empeño revolucionario cultural de las elites universitarias con el despertar de la conciencia de los oprimidos bajo la injusticia legitimaba la violencia como el único medio posible de liberación. Pero, sin embargo, respecto a los países desarrollados, «lo que dicen esos intelectuales pseudoprogresistas es ya otro cantar», porque al concernirles directamente «eso les urge exorcizar intelectualmente toda posibilidad de revolución, mostrar, a modo de ‘tranquilizante’, que tales movimientos subversivos no tienen la menor posibilidad de éxito y, razonando more marxista, que

---

<sup>9</sup> FERNÁNDEZ DE CASTRO, Ignacio, *Teoría sobre la revolución*, Madrid, Taurus, 1966 (1ª ed. 1959), pp. 160-161.

están fuera no sólo de la dirección, sino aún del movimiento mismo de la historia, que son inútiles e imposibles, anacrónicos e utópicos». Lo cual ponía de manifiesto, nada menos, que «la función que cumplen [los intelectuales], al servicio de la sociedad del bienestar por el consumo, en la que se encuentran plenamente integrados, como sus agentes del orden público intelectual», así como «nuestra propia ambigüedad de intelectuales, es decir, de hombres por profesión y talante muy poco revolucionarios, muy poco violentos, hablando de revolución y de violencia». Cuando por su parte ésta adquiriría una naturaleza difícilmente encasillable con los criterios clásicos, con sus nuevos actores y estrategias, y con su carácter de “representación” que resiste al análisis intelectual y moral general.

Como pensador católico, Aranguren tampoco podía pasar por alto la perspectiva religiosa. La violencia era un tabú que procedía del cristianismo, al igual que el sexo, y así como sobre éste actuó el ideal de castidad viril en el siglo XIX, la no violencia activa y revolucionaria «evitaría el enfrentamiento con el correspondiente tabú». Pero si la Iglesia, al menos su sector progresista, había vencido el tabú del sexo, se seguía oponiendo al uso de la violencia, una idea que para Aranguren mostraba por un lado «un ingrediente de aburguesamiento», por otro una lectura del Evangelio que ofrece una imagen no violenta de Jesús. Había teólogos como los norteamericanos Paul Lehmann y Richard Shaull que a esa idea oponían otra, la de ligar el amor al prójimo con la consecución para él de la justicia social, reconociendo la ambivalencia de toda revolución pero asumiendo el riesgo en una «actitud más cristiana que la aceptación pasiva de la injusticia establecida» y trasponiendo «al plano teológico, lo que en el testimonial llevó a cabo el sacerdote católico colombiano Camilo Torres». Precisamente el coloquio de Venecia del MIIC de junio de 1968 marcó cierto cambio de tendencia y en un documento avalado por el presidente de Pax Romana en nombre de tal organización, a la sazón Joaquín Ruiz-Giménez, un sector aún minoritario empezaba a reconsiderar la no violencia como parte intrínseca del mensaje evangélico, «y, por tanto, el uso, en determinados casos, de la violencia revolucionaria, no quedaría excluido *a priori* del comportamiento cristiano». Sobre esta cuestión Aranguren había presentado en 1967 un texto titulado *El cristiano y la violencia* como contribución a la Semana de los Intelectuales Católicos sobre *La Violence* celebrada en París, donde escribía que «el cristiano es el hombre cristiano, un hombre, en muchos aspectos, igual a los demás. La violencia del mundo es, ante todo, la violencia del hombre [...] El hombre, tanto el cristiano como el que no lo es, lleva la violencia dentro de sí, es y se hace violento, vive en la violencia, la violencia es su medio»<sup>10</sup>.

He citado largamente a Aranguren porque la suya es la construcción teórica sobre el tema más elaborada y representativa de aquellos años, y su concepto de “moral dialéctica” a va tener una

---

<sup>10</sup> ARANGUREN, José Luis L., *El futuro de la Universidad y otras polémicas*, Madrid, Taurus, 1973, pp. 146-182.

gran influencia en la valoración de muchos jóvenes de entonces hacia la violencia<sup>11</sup>. El prestigio de los pensadores pacifistas fue dejando paso al de Régis Debray o Frantz Fanon, teórico de la “violencia necesaria” y autor de *Los condenados de la tierra*, cuando sucesivamente la revolución cubana, la independencia argelina y la guerra de Vietnam, y contemporáneamente las guerrillas en América Latina, confluían hacia una valoración positiva del potencial transformador de la violencia, o al menos de su inevitabilidad ante la injusticia y el imperialismo en el Tercer Mundo<sup>12</sup>. No sólo la voz pública de los intelectuales, sino también el cristianismo más avanzado y la “nueva izquierda” coincidían en un “tercermundismo” o anticolonialismo que acabó caracterizando el discurso de la cultura progresista en los años siguientes, aunque sólo en un caso, el de ETA, llegara a materializarse en la lucha armada. Según Aranguren la violencia, ante la enorme desproporción de medios entre «los agentes de tal acción de conciencia y el inmenso Poder del Estado constituido», cobraba un carácter testimonial y martirial que había llevado al Che Guevara y al cura Torres hasta el sacrificio de la propia vida<sup>13</sup>. Según el jesuita chileno Hubert Daubechies, Camilo Torres era «un hombre que amó sinceramente a su pueblo y se entregó de lleno a su redención», mientras que Aguilar Navarro, en plena crisis de su militancia democristiana, definía al Che en términos casi cristológicos como «un hombre excepcional, un auténtico testimonio [...] pero hecho carne y sangre [que] seguirá ganando batallas desde su tumba y el fuego de su espíritu alumbrará y alimentará la revolución de los hombres de buena voluntad»<sup>14</sup>. Las imágenes del Che muerto no podían dejar de recordar las de Cristo joven tan habituales en los pósteres que decoraban los dormitorios de los jóvenes universitarios durante aquellos años.

Como apuntaba Aranguren, las interpretaciones del Evangelio en este tema eran opuestas y en la izquierda cristiana eran cada vez menos quienes las hacían a favor de un pacifismo a ultranza<sup>15</sup>. El compromiso militante y el empeño personal de muchos cristianos de izquierda en llevar su mensaje de redención a la política desembocaron pronto en una reconsideración moral de la violencia, lo que ha merecido luego interpretaciones historiográficas sobre la relación entre el catolicismo y el terrorismo de izquierda en sus orígenes<sup>16</sup>. La llamada “teología de la revolución” partía de esa reconsideración de la violencia: su máximo exponente en España, el canónigo José

---

<sup>11</sup> VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (*Sixto Cámara*), “La moral dialéctica”, *Triunfo*, 570 (1-IX-1973).

<sup>12</sup> FANON, Frantz, *Les Damnés de la Terre*, París, Maspero, 1961; GONZÁLEZ BERMEJO, Ernesto, “Régis Debray, el profeta prudente”, *Triunfo*, 634 (23-XI-1974).

<sup>13</sup> ARANGUREN, José Luis L., *op. cit.*, pp. 169-170.

<sup>14</sup> DAUBECHIES, Hubert, “Camilo Torres o la revolución desesperada”, *Cuadernos para el Diálogo*, 35-36 (agosto-septiembre 1966); AGUILAR NAVARRO, Mariano, “La muerte de un guerrillero”, 50 (noviembre 1967), y CASTRO SOMOZA, José Luis, “El Che no ha muerto”, 62 (noviembre 1968).

<sup>15</sup> SANTAMARÍA, Carlos, “Crisis actual del pacifismo y teología de la revolución”, *Cuadernos para el Diálogo*, 57-58 (junio-julio 1968).

<sup>16</sup> En Italia con el concepto del “cato-comunismo” desarrollado por BOCCA, Giorgio, *Il terrorismo italiano (1970-1980)*, Milán, Rizzoli, 1980. En España se ha afirmado para el caso de ETA, por ejemplo en ELORZA, Antonio (coord.), *La historia de ETA*, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 93.

María González Ruiz, escribía que Moisés había actuado «como un auténtico líder revolucionario. En un primer momento, acude a la remota posibilidad de los medios pacíficos y se entrevista con el Faraón. Posteriormente, cuando la experiencia le demuestra drásticamente que el camino de las negociaciones pacíficas se ha agotado, recurre al método de las guerrillas». Reseñando su libro más conocido, significativamente titulado *Creer es comprometerse*, otro autor católico, el psiquiatra cordobés José Aumente, afirmaba que «la no violencia en una sociedad por naturaleza violenta, es irreal, no tiene sentido, porque no ha lugar para decidirse por ella. La opción por la no violencia, por el amor, por la solidaridad a ultranza, por el evangelio, dejaría marginado al individuo, fuera de sitio, extraño, desplazado»<sup>17</sup>.

Josué de Castro, otro autor importante en la cultura cristiana progresista con su *Geografía del hambre*, ya lo había afirmado sin tapujos: «En América Latina no cabe otra posibilidad que la revolución violenta». Distinguía entre «dos tipos de violencia que se contraponen», por una parte «la violencia represiva de los mantenedores del sistema establecido» y por otra la «violencia liberadora de los pobres y oprimidos», y era evidente «que no pueden situarse en el mismo plano uno y otro tipo de violencia, y que cada una de ellas ha de tener un muy distinto calificativo moral», por mucho que históricamente la primera «se llamara derecho, defensa del orden» y la segunda «terrorismo o rebelión»<sup>18</sup>. Esa distinción entre dos violencias, la “progresiva” o “retardataria”, la “transformadora” o “reaccionaria”, la “revolucionaria” o “institucional”, sería una constante del discurso sobre este tema durante los años sesenta. Para Vázquez Montalbán había un «terror progresivo», desde Robespierre hasta Stalin, con un presupuesto humanista en su búsqueda, frente a un «terror represivo», que perseguía ante todo «la defensa del pasado convertido en superestructura desfasada de la realidad», una «violencia estructural» y legitimada que «provoca una serie de grandes y pequeños terrores condicionantes de la represión compartida por la colectividad»<sup>19</sup>.

La cita de Montalbán enlaza con otra fuente de la cultura progresista, como era la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, en particular de Herbert Marcuse, y su denuncia radical de una sociedad capitalista «totalmente impregnada de violencia, en las relaciones de producción, en la lucha por el predominio de unos sobre otros». Se empezaba ya a hablar de una “cultura de la violencia” presente en el cine (*Perros de paja* de Sam Peckinpah o *La Naranja Mecánica* de Stanley Kubrik), la televisión y los medios de comunicación de masas. Aranguren escribía en 1972:

---

<sup>17</sup> GONZÁLEZ RUIZ, José M, *Creer es comprometerse*, Barcelona, Fontanella, 1967; AUMENTE, José, “Sobre el nuevo libro de José M. González Ruiz”, *Cuadernos para el Diálogo*, 53 (febrero 1968).

<sup>18</sup> CASTRO, Josué de, “América Latina, ¿por qué la Revolución?”, *Cuadernos para el Diálogo*, 62 (noviembre 1968), y “América Latina: Reforma o Revolución”, extraordinario XXI (julio 1970). También CHAO, Ramón, “Josue de Castro: una voz del Tercer Mundo”, *Triunfo*, 508 (24-VI-1972).

<sup>19</sup> VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, “El terror”, *Triunfo*, 460 (27-III-1971).

«El Estado se ve cada vez más tentado por la violencia. Y no sólo por la violencia física, sino también por la violencia que se hace a la realidad con las palabras, por la violencia que pasa a través del lenguaje y se convierte, de este modo, en la verdadera violencia humana, la más temible de todas [...] Se trata de una violencia aparentemente impersonal, simbolizada, en forma extrema, en el mundo moderno, por la Bomba, pero que, como acabamos de ver, es también cotidiana y opera a través de comunicaciones falseadas. Es precisamente a esta violencia despersonalizada, tecnificada, a la que hay, sin duda, que resistir»<sup>20</sup>.

En las “sociedades opulentas” la tecnocracia no era sino la última forma de totalitarismo y hasta la sexualidad estaba impregnada de racionalidad industrial, de un consumismo que, en palabras de Haro Tecglen, daba lugar «al profundo peligro que hay en el terrorismo de lo cotidiano»<sup>21</sup>. Abundaban los pronósticos catastróficos sobre una deriva hacia el fascismo, porque «a medida que se vaya clarificando que la historia no vuelve atrás, que el cambio es inexorable, la conciencia de ir matando se irá apoderando de los albaceas del sistema [...] Un terror defensivo, sin ninguna pretensión humanista, ya no ejercido en nombre de ningún cuerpo de valores, parece adivinarse en el horizonte histórico», escribía Vázquez Montalbán imaginando el terror de los técnicos y de los «honrados padres de familia»<sup>22</sup>. En 1970, con la opinión pública nacional e internacional pendiente de los juicios de Burgos, y muchos estados de ánimo en vilo, un editorial de la revista *Cuadernos para el Diálogo* recordaba que «la violencia ‘institucionalizada’, la del ‘desorden establecido’, como la ha calificado certeramente el pensamiento cristiano de nuestros días, desde Mounier a Helder Cámara y a Pablo VI; la violencia inherente a las instituciones y a los tipos de relaciones socio-económicas del mundo ‘capitalista’, un mundo viejo y roto, es la violencia más contagiosa y prolífica, la violencia matriz de las otras violencias y contra-violencias, en interacción creciente»<sup>23</sup>.

Pero este discurso, que tuvo su ápice en 1968, va a iniciar entre 1970 y 1973 un proceso de agotamiento no siempre evidente, pues sus señales aparecían junto a otras manifestaciones de dogmatismo ideológico casi manierista, casi como si fuera el canto del cisne de la cultura radical. También es cierto que el inmovilismo político de la dictadura y su perenne recurso a la represión no podían sino favorecer la violencia y, no lo olvidemos, resultaron determinantes en los muy pocos casos en que se llegó a dar el paso fundamental del discurso a los hechos, los de ETA, el FRAP y, en último lugar, los GRAPO. Como ha recordado Fernando Reinares, «el terrorismo que todavía

---

<sup>20</sup> ARANGUREN, José Luis L., *op. cit.*, p. 184.

<sup>21</sup> HARO TECGLEN, Eduardo (*Pablo Berben*), “La cultura de la violencia”, *Triunfo*, 491 (26-II-1972).

<sup>22</sup> VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel, “El terror”, *Triunfo*, 460 (27-III-1971).

<sup>23</sup> Editorial, “El ascua y la llama”, *Cuadernos para el Diálogo*, 83-84 (agosto-septiembre 1970).



persiste en España es una herencia del franquismo»<sup>24</sup>. Ante las primeras acciones terroristas de ETA y ante la cercana perspectiva de la muerte de Franco, sobre la que actuaban los ejemplos de la Grecia de los coroneles, del terrorismo negro en Italia, de la revolución en Portugal o del golpe de Estado en Chile, junto a la memoria del propio pasado en la experiencia republicana y la guerra civil, la izquierda se debatía entre el miedo a una reacción violenta del poder establecido y de la derecha, lo que actuaba a favor de la moderación, y la tentación de responder a esa amenaza con una “legítima” violencia de signo contrario.

La muerte de Allende, quien había llegado a personificar la esperanza de una vía pacífica y democrática al socialismo, y la brutal represión desencadenada por el general Pinochet provocaron una condena generalizada. La imagen del presidente con el casco y la metralleta defendiendo el Palacio de la Moneda hacía presagiar un resurgir de la lucha armada y, en la conmoción del momento, las expresiones alcanzaron una elevada virulencia verbal dentro de la izquierda radical y nacionalista. Desde aquel momento –advertían, entre otros, Antonio Burgos y José Aumente– «los militantes socialistas –socialdemócratas– habrán de plantearse sus dudas respecto hasta qué punto, en última instancia, ‘los que deciden son los fusiles’ y no los ‘votos’» y, dado que la violencia estaba ya implantada en la sociedad, ahora se trataba de saber los medios, los fines y la «permanencia o transitoriedad» de una «violencia revolucionaria» opuesta a la «reaccionaria», porque «un parto implica siempre una noble violencia y el ‘paso al socialismo’ es un verdadero parto». Mientras que para el abogado Juan María Bandrés, «las legítimas finalidades de la sociedad socialista sólo se conseguirán mediante la revolución y la acción violenta»<sup>25</sup>. El catedrático Mariano Aguilar Navarro, sólo unos años antes destacado dirigente democristiano, escribía que «en su día, y este día no tardará, serán barridos revolucionariamente los que se han juramentado ahora para derribar al presidente Allende» y «la estirpe de multitud de democristianos o de neopopulistas será destinada al desecho», pues el capitalismo «acudirá a la violencia de todo tipo [...] para derrocar al régimen que, nacido de las urnas, quisiera intentar la edificación de una sociedad socialista». Junto a Roberto Mesa, comparaba Chile con Argelia, Checoslovaquia, Grecia, Santo Domingo o Indonesia para constatar que «la vía pacífica al socialismo, hasta ahora, es una utopía optimista» ante el «inevitable el enfrentamiento de la violencia revolucionaria con la violencia reaccionaria nacional y la violencia imperialista». La conclusión era que «con relación al mundo

---

<sup>24</sup> REINARES, Fernando, “Democratización y terrorismo en el caso español”, en J.F. Tezanos; R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), *La transición democrática española*, Madrid, Sistema, 1989, p. 611.

<sup>25</sup> BURGOS, Antonio; AUMENTE, José; CINTADO, Manuel; PERALTA, Juan L.; BANDRÉS, Juan M., “Chile a encuesta”, *Cuadernos para el Diálogo*, 121 (octubre 1973).

subdesarrollado, la independencia económica, la soberanía nacional auténtica sólo puede tener una vía: la violencia, el terror»<sup>26</sup>.

Pero lo más significativo fue que en el PSOE, el Partido Socialista en el Interior (PSI) y el PCE una indignación semejante por lo sucedido llevó a una lectura muy diferente, a favor de la moderación, la paz y la unidad de todas las fuerzas antifranquistas. Enrique Múgica reafirmaba la firme convicción de su partido de que «el socialismo solamente podrá alcanzarse por la vía democrática», descartaba la vía insurreccional y criticaba el «descontrol de determinados sectores utopistas y negativos». El dirigente del PCE Sánchez Montero se manifestaba contra el «infantilismo» de cierta izquierda y a favor de la vía democrática al socialismo que «en los países desarrollados, como los europeos, es la más viable además de ser la deseable»<sup>27</sup>. Para Tierno Galván la respuesta más frecuente a lo ocurrido había sido «la de emitir que era la violencia y el autoritarismo el mejor medio para avanzar hacia el socialismo», lo que a su juicio era «rigurosamente falso» porque «estamos obligados, ahora más que nunca, a seguir la vía democrática para conseguir una democracia real [...] Cuando no se puede hacer la revolución, el diálogo y la paciencia son fines morales»<sup>28</sup>. Como sucedería otras veces en momentos de máxima tensión, el pasado histórico se hacía más presente, y así Pablo Castellano y Joaquín León recordaban la experiencia republicana para coincidir en que «democracia no tiene que ser paralelo de debilidad y de impotencia». Otra cosa es saber hasta dónde las declaraciones públicas de sus líderes reflejaban la opinión mayoritaria de los militantes de esos partidos, donde seguramente seguía dominando una cultura de “oportunismo revolucionario” que según José María Mohedano, entonces joven militante comunista procedente del área cristiana del “Felipe”, no excluía a priori ninguna vía al depender de su adaptación a las circunstancias históricas específicas<sup>29</sup>. De manera semejante, el órgano interno del PSI había tomado los acontecimientos de Chile, poco antes del golpe militar, «como un ejemplo para que en lo sucesivo comprendamos claramente que si se hace necesaria la acción violenta del Estado contra los enemigos de la libertad no es porque cristianos y socialistas crean que éste es el camino, sino porque es el único camino que queda para combatir la violencia capitalista»<sup>30</sup>.

En la cultura del progresismo el discurso ideológico sobre la violencia convivía en permanente paradoja con un análisis de la praxis política orientado, por lo general, mucho más al gradualismo que a la insurrección. Los teóricos marxistas más influyentes entre la “nueva

---

<sup>26</sup> MESA, Roberto, “Chile no es una excepción”, y AGUILAR NAVARRO, Mariano, “¿Sólo Allende ha muerto?”, *Cuadernos para el Diálogo*, 121 (octubre 1973). También “Chile”, *Triunfo*, 573 (22-IX-1973).

<sup>27</sup> “Chile a encuesta”, *cit.*

<sup>28</sup> TIerno GALVÁN, Enrique, *Cabos sueltos*, Barcelona, Bruguera, 1981, p. 465.

<sup>29</sup> “Chile a encuesta”, *cit.*

<sup>30</sup> “El destino de Chile”, *El Socialista en el interior* (agosto 1973); Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares.

izquierda” –desde Gramsci a Gyorgy Lukács, Maurice Duverger, Roger Garaudy, Adam Schaff o André Gorz– habían señalado que la revolución violenta era inviable «en los países occidentales, dado el nivel de desarrollo existente», y defendían la necesidad de acometer el proceso revolucionario con gradualismo para llegar a construir un socialismo democrático y humanista<sup>31</sup>. Incluso desde el marxismo-leninismo más ortodoxo se prestaba mayor atención a la organización interna y la movilización social que a una violencia individualista o minoritaria, estigmatizada por Lenin como “pequeñoburguesa”. Eso explica que el apoyo generalizado a las revoluciones “populares” en el Tercer Mundo fuera bastante menos unánime cuando se trataba del terrorismo árabe, judío, corso, irlandés, altotesino o quebequés. Canadá, Italia, Alemania o el Reino Unido demostraban que la violencia no era exclusiva de los países pobres y que el desarrollo económico no inmunizaba contra las posibles rupturas del consenso social. Afirmar que el terrorismo era la guerra de los pobres frente al terror admitido e institucionalizado de los poderosos, o que la única manera de acabar con el fenómeno era la desaparición de sus causas socioeconómicas estructurales, no impedía una valoración negativa de sus consecuencias en la creciente «degradación de la lucha política»<sup>32</sup>.

Desde las páginas de *Triunfo*, Haro Tecglen defendía el consenso de las elites políticas contra el terrorismo, pues si «las violencias visibles eran la respuesta a violencias invisibles [...] no admitimos ni las unas ni las otras», y criticaba las bombas de los católicos irlandeses o el asalto pro palestino en las Olimpiadas de Munich como «hechos de una misma catadura, que empañan y tiñen causas justas». En cambio, abogaba por «un verdadero sentido de la recuperación del equilibrio político, como han sido las revoluciones de Portugal y de Grecia», y por «la posibilidad de instaurar de verdad un orden nuevo, que, sin tener tras de sí montones de cadáveres, puede ser más viable y perdurable, más justo, menos defensivo y con mayor capacidad para instaurar sus nuevos principios humanistas»<sup>33</sup>. Es verdad que la suya no era aún la postura hegemónica, ni siquiera mayoritaria, dentro de la izquierda (desde esas mismas páginas Vázquez Montalbán y muchos otros valoraban positivamente las acciones del nacionalismo palestino o irlandés), pero el terrorismo de extrema izquierda comenzó a ser percibido con desconfianza o enjuiciado en términos negativos. Los «justicieros solitarios» de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) se habían convertido en una vanguardia revolucionaria alejada de las masas y sólo estaban consiguiendo hacer de Alemania una fortaleza policial<sup>34</sup>. Lo mismo en Italia, donde el clima de violencia sólo beneficiaba a la «ideología

---

<sup>31</sup> TOHARIA, Juan José y NASARRE, Eugenio, “Entrevista a Maurice Duverger”, *Cuadernos para el Diálogo*, 51 (diciembre 1967).

<sup>32</sup> Editorial, “El año de los secuestros”, *Triunfo*, 449 (9-I-1971).

<sup>33</sup> HARO TECGLEN, Eduardo, *Triunfo*, 438 (24-X-1970); “La olimpiada rota”, 520 (16-IX-1972); “Violencia y consenso”, 609 (I-VII-1974) y “Revolución y sangre”, 636 (7-XII-1974).

<sup>34</sup> SANDOZ, Gerard, “Alemania, justicieros solitarios”, *Triunfo*, 507 (17-VI-1972).

del orden» del neofascista Movimiento Social Italiano (MSI) o del sector más derechista de la Democracia Cristiana, una constatación que alimentaba las hipótesis conspirativas sobre la infiltración de los servicios secretos extranjeros y de los aparatos de seguridad del Estado, porque «casi todos los datos llevan a la conclusión de que esas acciones han sido provocadas o convenientemente azuzadas por la extrema derecha»<sup>35</sup>.

Los atentados terroristas de ETA obligaban a adoptar una posición más neta que otros alejados en tiempo o en el espacio y, por supuesto, que los movimientos populares en los procesos de descolonización del Tercer Mundo. La condena de la violencia política procedente de la extrema izquierda (y por supuesto derecha) fue casi siempre unánime en los medios clandestinos o tolerados del antifranquismo, pero el discurso no podía dejar de ser complejo y matizado por la necesidad de denunciar al mismo tiempo las causas que la hacían posible, la primera de ellas la propia dictadura franquista. El «desasosiego social», consecuencia del modo «autárquico» en que «ciertas oligarquías capitalistas [...] con el ‘centralismo’ como excusa y refugio» ejercían un poder social y económico con un nivel de concentración sin parangón en Europa, así como en la «desazón política» por la ausencia de canales de expresión para las aspiraciones del pueblo vasco, eran algunas de esas causas aducidas por un editorial de *Cuadernos para el Diálogo* –motivo de expediente en virtud del famoso artículo 2 de la Ley de Prensa– sin dejar por ello de condenar el asesinato del inspector Melitón Manzanás. Que ETA era un fruto de la dictadura lo demostraba el hecho de que sus «métodos de acción son distintos de los hasta la fecha empleados por los grupos vascos tradicionales», y que su violencia no procedía «de los obreros, sino de los jóvenes intelectuales nacidos en esas clases dominantes o en sus cercanías». Una violencia que venía de lejos, del preámbulo del decreto de 1937 «que castigaba a vizcaínos y guipuzcoanos, colectiva e indiscriminadamente, por su actitud durante la guerra civil»<sup>36</sup>. Si bien «el inmovilismo, pese a cubrirse de respetabilidad, puede llegar a ser también una forma de violencia [...] sobre todo si se apoya en la injusticia social», buscar las causas profundas tampoco quería ser «ni una eximente, ni siquiera una atenuante para los actos de violencia»<sup>37</sup>.

Los juicios de Burgos de 1970, y la consiguiente campaña nacional e internacional, habían dejado claro que la represión no bastaba «para sofocar estos fenómenos de ruptura social» y de que se corría el riesgo de un enfrentamiento entre las «dos violencias», en el que «violencia subversiva» y «violencia blanca» del Estado o de una extrema derecha tolerada se enzarzaran «en una espiral sin

---

<sup>35</sup> VÁZQUEZ MONTALBÁN, “Manuel, “Feltrinelli, la confusión cubrió su vida y su muerte”, *Triunfo*, 495 (25-III-1972). También HARO TECGLÉN, Eduardo, “La última bomba en Milán. Pero, ¿quién es Bertoli?”, 556 (26-V-1973) y “Prima della rivoluzione... Terror negro en Italia”, 620 (17-VIII-1974).

<sup>36</sup> Editoriales, “No son sólo las palabras”, *Cuadernos para el Diálogo*, 57-58 (junio-julio 1968), y “Sobre el pueblo vasco”, 59-60 (agosto-septiembre 1968).

<sup>37</sup> Editorial, “Dolor en el País Vasco”, *Cuadernos para el Diálogo*, 69 (junio 1969).

fin»<sup>38</sup>. De hecho, la divergencia fundamental entre la izquierda democrática y la que acabó tomando las armas se produjo en torno a la estrategia de la tensión (acción-represión-acción), que esta segunda convirtió en la base de su lucha, y que la primera no dudó en rechazar porque ponía en peligro su empeño por restablecer la democracia y la convivencia pacífica entre los españoles. La idea de que la violencia política, «proceda de la extrema derecha o de la extrema izquierda», tenía un «carácter esencialmente reaccionario» al favorecer «las tendencias más involucionistas» y «perjudiciales para quienes conscientemente, valientemente, vienen batallando –y sufriendo– por hacer a nuestra sociedad más justa, más libre, más democrática» fue imponiéndose desde entonces<sup>39</sup>. Y estaba tras la firme condena al asesinato de Carrero Blanco (cuya rotundidad no se explica por la censura): «No es este asesinato del Presidente del Gobierno el primer hecho en que esta publicación [*Triunfo*] se manifiesta sin ambigüedades contra la violencia, contra las violencias, como forma de dirimir las diferencias políticas o los modos de gobernar un país. Ni es preciso estar de acuerdo con la ideología del asesinato para condenar, abiertamente, su asesinato»<sup>40</sup>.

*Cuadernos para el Diálogo* expresó asimismo su «inequívoca y tajante, ética y moralmente sentida, condena de la violencia» por el atentado, pero una vez más la repugnancia moral o el rechazo político hacia el terrorismo no excluía la obligación, igualmente moral y política, de buscar sus causas<sup>41</sup>. En otros sectores del interior y del exilio la noticia del asesinato fue recibida con júbilo, indisimulado en *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, pero permanecía la preocupación por la previsible respuesta del régimen, en un momento de máxima tensión por los recientes acontecimientos de Chile, y sus consecuencias para la sucesión<sup>42</sup>. También desde París un editorial de *El Socialista* recordaba «que un ilustre padre de la Iglesia española consideró como legítimo el tiranicidio», y una declaración conjunta del PSOE y la UGT aludía a los «treinta y seis años en un permanente clima de violencia y enfrentamiento, en perenne guerra civil» y a que «la violencia institucionalizada desde el poder ha de engendrar una violencia de contestación inevitable»<sup>43</sup>. Salvador de Madariaga escribía que «para ningún hombre de conciencia es posible admitir y aprobar cualquier tipo de asesinato [...] Pero debemos considerar este episodio de sangre como una consecuencia natural de la política franquista que se basa desde hace casi cuarenta años sobre la

---

<sup>38</sup> Editoriales, “¿Violencia blanca?”, *Cuadernos para el Diálogo*, 89 (febrero 1971), y “Dos pesos, dos medidas”, 91 (abril 1971).

<sup>39</sup> Editorial, “Terrorismo en Zaragoza”, *Cuadernos para el Diálogo*, 110 (noviembre 1972).

<sup>40</sup> Editorial, *Triunfo*, 587 (29-XII-1973).

<sup>41</sup> Nota de urgencia, “Ante el asesinato del presidente del Gobierno”, *Cuadernos para el Diálogo*, extraordinario XXXVIII (diciembre 1973).

<sup>42</sup> La revista publicó en 1974 un volumen titulado *Operación Ogro: cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco*, con un informe firmado por *Julen Aguirre*, seudónimo de Eva Forest. Para su director, José Martínez, «la violencia es la única forma de lucha contra el medio adverso [...] No creo que sea necesario demostrar que la violencia fue el origen de la sociedad que nos hizo hombres», en FORMENT, Albert, *José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico*, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 163.

<sup>43</sup> Editorial, *El Socialista*, 13, y “Ante la ejecución de Carrero Blanco”, 14 (enero 1974).

violencia», y sólo del régimen iba a depender que en España se produjera un «diálogo entre las violencias» que condujera a una nueva guerra civil<sup>44</sup>.

Pero fue sin duda el atentado a la cafetería *Rolando* en la calle Correo de Madrid del 13 de septiembre de 1974 el que marcó una ruptura en el discurso y las actitudes de la izquierda, determinando su alejamiento definitivo de cualquier tentación no ya de asumir, sino incluso de valorar de manera más o menos ambigua el potencial transformador de la violencia política. Una cosa era matar al “torturador” Melitón Manzanos o al “tirano” Carrero Blanco, y otra muy distinta un «un atentado terrorista indiscriminado y donde mueren ciudadanos corrientes» porque «es moralmente rechazable y políticamente reaccionario [...] No es solamente un delito. Es un acto desgarradamente inhumano, de violencia ciega, sin explicación posible. Es, además, un garrafal error político»<sup>45</sup>. ETA no se atreverá a reivindicar el atentado, que a su vez provocó una represión indiscriminada, ni sus acciones tendrán nunca más esa innegable eficacia demostrativa y de “propaganda armada” del espectacular asesinato de Carrero. La izquierda comenzará a hablar de los «oscuros intereses» que pretendían poner en marcha una espiral de acción-represión que pudiera «condicionar de manera irreparable cualquier proyecto de convivencia libre y democrática entre los españoles»<sup>46</sup>. Le costaba creer, como le costará aún más tras la muerte del dictador, pese a la oleada de solidaridad provocada por las últimas ejecuciones del franquismo, que una parte de la propia izquierda pudiera poner en peligro la transición hacia la democracia.

La muerte de Franco, que no suponía necesariamente el final de la dictadura pero sí abría un proceso de negociación que podía llevar a un sistema democrático, puso en primer plano todas las cuestiones relacionadas con la violencia política. Ya no se trataba de que nunca más se volviera a hablar del potencial liberador y transformador de la violencia, sino de elaborar un discurso contra el terrorismo que acabara siendo el único legitimado en el espacio público democrático, espacio de resolución pacífica de los conflictos. La violencia de cualquier procedencia o motivación fue percibida como una amenaza tanto para el éxito de la reforma democrática, como para las estrategias de cambio desarrolladas por los partidos de izquierda. Los cuales establecían una relación directa entre los actos violentos y una voluntad consciente de alterar o dificultar las etapas del proceso político: el asesinato por ETA del presidente de la diputación de Guipúzcoa, José María de Araluce, en 1976 provocó la condena pública del PSOE, del Partido Socialista Popular (PSP), del PCE y hasta del Movimiento Comunista (MC), surgido de la propia ETA, porque constituía un «grave obstáculo» para la voluntad demostrada por el pueblo vasco de «conquistar pacíficamente

---

<sup>44</sup> MADARIAGA, Salvador de, “Diálogo fra le violenze”, *Corriere della Sera* (21-XII-1973).

<sup>45</sup> Editorial, “Con muy vivo dolor”, *Cuadernos para el Diálogo*, 132 (septiembre 1974), y PECES-BARBA, Gregorio, “Las exigencias de la razón”, 134 (noviembre 1974).

<sup>46</sup> Editorial, “Estado de excepción y violencia en el País Vasco”, *Cuadernos para el Diálogo*, 140 (abril 1975).

sus derechos democráticos y nacionales»<sup>47</sup>. El atentado sólo podía dificultar la amnistía, que se había convertido en el lema de la movilización durante 1976, «en un momento de difíciles maniobras políticas del poder hacia soluciones de pacto, de transigencia, de moderación. Es como si los asesinos pretendieran poner al Gobierno contra la pared, en momentos en los que más que nunca el poder necesita cauces de diálogo»<sup>48</sup>.

La violencia parecía contraproducente políticamente porque, además de elevarse contra cada fase del cambio, llevaba consigo el peligro de una reacción autoritaria y de una vuelta atrás, amenaza siempre presente en el discurso público de aquellos años. Tras los acontecimientos de Vitoria en 1976, *Triunfo* advertía que «el recurso a la violencia, además de ser éticamente condenable, lo es políticamente, porque se está haciendo el juego a la reacción»<sup>49</sup>. El peligro involucionista se asociaba al temor de un nuevo enfrentamiento entre las “dos Españas”, cuya memoria afloraba en los momentos de mayor tensión, como durante la llamada “semana negra” de enero de 1977. Fue entonces cuando se hizo más patente el miedo a un deterioro del orden público que recordaba demasiado a los años treinta, pero si ese recuerdo parecía evidente a todos, no actuó para agudizar las tensiones sino, al contrario, para superarlas en un deseo generalizado de reconciliación nacional y de paz civil (aunque no se trataba de un proceso unidireccional ni necesario, como demuestra el peculiar caso vasco<sup>50</sup>). Haro Tecglen recordaba cómo «fue fácil mantener el desorden en los últimos tiempos de la República Española, para luego intervenir en el sentido de reprimir ese desorden, y mantener la leyenda de que la República no supo mantener la ley y el orden», y *Triunfo* calificó los sucesos de enero de «conjura contra el pueblo», pues «aquí nadie quiere el caos, aquí nadie quiere la revolución. Nadie quiere que este país llegue a convertirse en la Argentina, nadie quiere que se convierta en Chile, nadie quiere que se convierta en la España misma de la guerra civil»<sup>51</sup>.

Es decir, los actos violentos perjudicaban del mismo modo a la estrategia reformista del gobierno que a la de movilización de masas promovida por la izquierda, desde el momento en que ésta era juzgada como una amenaza para el orden y la paz. Eso llevó a los líderes de la oposición a tomarse muy en serio el tema del orden público, conscientes de que mantenerlo era la condición *sine qua non* para el éxito de la reforma, incluso hasta el punto de llegar a sacrificar, si era necesario, su capacidad de movilización social, fundamento de su estrategia de “ruptura

---

<sup>47</sup> Comunicado de la Secretaría del PSP, *El País* (5-X-1976); Carlos Alonso Zaldívar del PCE, y José Luis Cámara del PSOE, en *Triunfo* (16-X-1976); Comité Ejecutivo del MC, *El País* (5-X-1976).

<sup>48</sup> Editorial, *Triunfo* (16-X-1976).

<sup>49</sup> Editorial, *Triunfo* (13-III-1976).

<sup>50</sup> En el País Vasco la memoria de la guerra reforzaba, por el contrario, el conflicto con España, según AGUILAR, Paloma, *La guerra civil en el discurso nacionalista vasco. Memorias peculiares para un aprendizaje político diferente*, Madrid, Instituto Ortega y Gasset, 1997.

<sup>51</sup> “La violencia y la ley”, *Triunfo*, 764 (17-IX-1977); Editorial, *Triunfo* (27-III-1976) y GUZMÁN, Eduardo de, “El sangriento 24 de enero de 1977. Fracaso y lección de una conjura contra el pueblo”, *Triunfo*, 783 (28-I-1978).

democrática”. Tras la matanza de Atocha, al convocar una jornada de luto, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales pidió a los trabajadores que evitaran «toda acción en la calle», mientras los líderes de la oposición, en un comunicado público, apelaban «al sentido cívico de las fuerzas políticas y sociales» a fin de evitar «cualquier clase de acciones en la calle que puedan servir de pretexto a los grupos terroristas que quieren impedir el cambio democrático»<sup>52</sup>. Se habló entonces de negociaciones destinadas «a la elaboración de unos compromisos para el mantenimiento del orden público», en las cuales González y Carrillo habrían prometido al presidente Suárez «que sus partidos harían lo posible para conservarlo»<sup>53</sup>. Sin duda se trataba de una concepción del orden público derivada del franquismo, pues el gobierno no había «asimilado todavía cuál es el alcance de ‘la calle’», de manera que la sobreestimaba como «un reflejo del orden antiguo, o quizá lo contrario, la ideación de un futuro sin tensiones y sin protestas»<sup>54</sup>. Pero tal actitud coincidía también con la preocupación por “el orden y la paz” presente en el conjunto de la sociedad, por encima del deseo de libertad, tal como muestran las encuestas de opinión de la época<sup>55</sup>.

El rechazo de la violencia como arma política y la voluntad de orden y de paz se extendieron durante la transición hasta devenir uno de los ejes de la nueva cultura política democrática en construcción. Un consenso entre las fuerzas políticas reformistas, de izquierda y derecha, que determinó la marginación progresiva de los sectores sociales que sostenían el terrorismo y que terminó arrastrando a las principales organizaciones de la extrema izquierda, víctimas de su identidad revolucionaria pese a no estar implicadas en la violencia, hasta hacerlas desaparecer prácticamente del panorama político. Pero ni siquiera entonces existió un discurso único y consensuado, por mucho que desde junio de 1977 las principales fuerzas políticas representadas en el parlamento condenaran todos los actos de terrorismo (incluido el PNV desde 1978). La derecha procedente del franquismo, representada por AP, pasaba de puntillas sobre los atentados de la extrema derecha y ponía el acento en el orden público, con la vista puesta en el pasado: Manuel Fraga se remontaba nada menos que un siglo atrás para proclamar que «después de 1810 se ha repetido el error de confundir la libertad y democracia con la debilidad de gobierno, desorden en la calle e inseguridad». El ex ministro de Franco no podía evitar una comparación entre la presunta incapacidad del gobierno democrático para garantizar el orden y el régimen anterior, argumento recurrente en el discurso de la derecha durante todo el periodo, ni una comparación entre la

---

<sup>52</sup> *El País* (26-I-1977). Ver BABY, Sophie, “Violence et transition en Espagne: la Semaine Noire de Madrid (janvier 1977)”, en A. Dulphy e Y. Léonard (dirs.), *De la dictature à la démocratie: voies ibériques*, Bruselas, Peter Lang, 2003.

<sup>53</sup> HARO TECGLÉN, Eduardo, “El orden público”, *Triunfo*, 777 (17-XII-1977).

<sup>54</sup> Editorial, “Olor a pólvora”, *Triunfo*, 778 (24-XII-1977).

<sup>55</sup> Fundación FOESSA, *Informe sociológico sobre la situación social de España*, Madrid, Euramérica, 1970, e *Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981*, Madrid, Euramérica, 1981.



coyuntura de 1936 y la presente, incluso para destacar que las «cifras elocuentes [de entonces] palidecían ante las cifras actuales»<sup>56</sup>.

Como se puede imaginar, no era muy diferente la posición de los sucesivos ministros del Interior de la UCD, aunque es sabido que este cargo imprime carácter y no suele dejar demasiado espacio para valorar la actuación de las fuerzas de seguridad bajo sus órdenes (pese a la frecuencia con que parecían escapar a su control). Para Rodolfo Martín Villa las manifestaciones no constituían sino signos de «una agresividad callejera» y de una «democracia vociferante» que debía ser limitada, y Antonio Ibáñez Freire hizo llamamientos para «reforzar al máximo el sentido de la responsabilidad de los que convoquen manifestaciones, sobre todo en la calle, a fin de que éstas no se conviertan en un campo de agitación propicio a los enemigos de la democracia». Juan José Rosón, por entonces aún gobernador civil de Madrid, valoraba las acciones violentas de las bandas ultras como «violencia callejera», fruto de un «espíritu exacerbado de confrontación» entre ideologías extremistas, repartiendo así las culpas con la izquierda y minusvalorando el peligro real de la amenaza involucionista. En cualquier caso, UCD se distinguió netamente en su discurso de AP (y por supuesto de Fuerza Nueva y otros grupos de la extrema derecha) y el gobierno de Adolfo Suárez acogió la demanda procedente de la oposición de izquierda de superar el viejo concepto franquista de “orden público” a favor de una “seguridad ciudadana” entendida «como la concepción democrática del orden en un régimen de libertades». Así se recogió en los Pactos de la Moncloa y luego en la Constitución de 1978, de manera que dos años más tarde el mismo Ibáñez Freire podía declarar que «en una sociedad democrática, deben ser necesariamente compatibles, como dice nuestra Constitución, la protección y garantía de las libertades, y el mantenimiento de la seguridad ciudadana»<sup>57</sup>.

La izquierda tampoco dejó durante esos años de asociar la condena al terrorismo con la constatación de que persistía una «violencia oficial» en las torturas y los comportamientos arbitrarios, autoritarios o brutales de las fuerzas de orden público, que no podían dejar de recordar los difíciles años de persecución durante el franquismo y alimentaban la sospecha de una connivencia de ciertos aparatos del Estado con los “incontrolados” activistas de la extrema

---

<sup>56</sup> Manuel Fraga, DSC, 8, Legislatura Constituyente (14-IX-1977); 133, Legislatura Constituyente (8-XI-1978), y 37, I Legislatura (11-X-1979), en BABY, Sophie, “Violence et démocratie: la question de l’ordre public dans la transition démocratique espagnole (1975-1982)”, *Actes du colloque international en hommage à François-Xavier Guerra*, organizado por el Centre de Recherches d’histoire de l’Amérique latine et du monde ibérique, Universidad de París I Panthéon-Sorbonne (en curso de publicación), y “Violence et paix: des valeurs au coeur des cultures politiques de la jeune démocratie espagnole (1975-1982)”, *Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin*, n°17, París, Instituto Pierre Renouvin, Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, 2004. Agradezco a la autora la consulta de ambos textos, de donde proceden las siguientes citas del Diario de Sesiones de las Cortes (DSC).

<sup>57</sup> Rodolfo Martín Villa, DSC, 7, Legislatura Constituyente (13-IX-1977); Antonio Ibáñez Freire, DSC, 54, I Legislatura (14-XII-1979), y 63, I Legislatura (14-II-1980); Adolfo Suárez, DSC, 36, Legislatura Constituyente (5-IV-1978).

derecha<sup>58</sup>. Los «provocadores fascistas» fueron durante esos años denunciados constantemente por la izquierda democrática desde la prensa y el parlamento, donde exigió la depuración de responsabilidades, la creación de comisiones de investigación, la reforma profunda de los aparatos de seguridad del Estado y el cese de los responsables políticos, como gobernadores civiles, ministro de Interior y hasta del presidente del gobierno<sup>59</sup>. Pero igual de rotunda fue su denuncia y rechazo del terrorismo de izquierda en su pretensión «de provocar reacciones que pudieran desestabilizar el proceso constitucional», en palabras de Santiago Carrillo, y aún después del golpe de Estado en 1981 los actos terroristas testimoniaban esa «obra criminal [que] puede crear el ambiente, el clima en el cual hechos como el del 23 de febrero puedan encontrar un eco mayor» (Simón Sánchez Montero)<sup>60</sup>.

A la izquierda le costó convencerse de que unas organizaciones nacidas, al fin de al cabo, en su seno pudieran poner en peligro el tránsito hacia la democracia, de que los GRAPO fueran sólo revolucionarios maoístas fanáticos y no unos románticos ingenuos infiltrados por la policía. Tras la primera acción de los GRAPO, el 18 de julio 1976, *Triunfo* se interrogaba sobre sus autores: «Sería fundamental conocer la identidad última de [...] sus lejanos u ocultos inspiradores» [porque] ¿quiénes podían tener interés en que la pólvora volviese en el aniversario de tanta otra pólvora que todavía, a los cuarenta años, no se ha disipado de los olfatos de muchos?»<sup>61</sup>. Condenar los actos de terrorismo revolucionario o nacionalista exigía denunciar también las causas que los motivaban, «acabar con toda sombra de posible acción por motivaciones políticas», siguiendo el razonamiento de que el «orden democrático» era una premisa del orden público (Ramón Tamames)<sup>62</sup>. Para el veterano monárquico opositor al franquismo Joaquín Satrústegui, ahora en las filas de UCD, «el delito político existe cuando los países son autoritarios, pero cuando los países son democráticos, entonces no hay ninguna razón para calificar de político lo que es la acción de eliminar violentamente a sus contrarios»<sup>63</sup>.

Las pervivencias autoritarias explicaban por un lado cierta ambigüedad en el discurso sobre el terrorismo, pero por otro lado el lenguaje público y de los medios de comunicación, como ha recordado el periodista Arcadi Espada, tendió hacia la exclusión, la contención o el eufemismo de la

---

<sup>58</sup> Carta de veinte ayuntamientos guipuzcoanos al Gobierno Civil de la provincia, *Triunfo* (18-IX-1976).

<sup>59</sup> Santiago Carrillo, DSC, 43, Legislatura Constituyente (23-XII-1977), y Enrique Múgica, DSC, 10, I Legislatura (23-V-1979). Ver, al respecto, MUÑOZ SORO, Javier y BABY, Sophie, “El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1982)”, en J. Muñoz Soro, J. Rodrigo y J.L. Ledesma, *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 279-304.

<sup>60</sup> Santiago Carrillo, DSC, 11 (21-VII-1978), y Simón Sánchez Montero, Diario de Sesiones de Comisiones (Interior), I Legislatura (1-IV-1981).

<sup>61</sup> *Triunfo*, 24-VII-1976. Todavía en 1978 Santiago Carrillo y en 1979 Enrique Múgica seguían preguntándose «¿Qué es el GRAPO? ¿Quién hay detrás del GRAPO?», en DSC, 133, Legislatura Constituyente (8-XI-1978), y DSC, 10, I Legislatura (23-V-1979), respectivamente.

<sup>62</sup> Ramón Tamames, del PCE, en DSC, 14, Legislatura Constituyente (27-IX-1977).

<sup>63</sup> Joaquín Satrústegui, DSC, 65, I Legislatura (20-II-1980).

violencia, al pudor a llamar las cosas por su nombre, a la poca sensibilidad ante el sufrimiento de las víctimas (al menos de las ajenas) en nombre de la paz civil<sup>64</sup>. Sólo cuando se haga evidente que ni siquiera la democratización abierta con el proceso constitucional y autonómico lograba acabar con el terrorismo, la condena común y absoluta de la violencia predominará de manera definitiva sobre las motivaciones políticas. La trampa de la violencia, no obstante, seguirá al acecho y otros muchos caerán todavía en la tentación de responder al terror con el terror, desde altos cargos del gobierno hasta amplios sectores de la opinión pública que pensaban, como un editorial de *Diario 16* datado el 23 de marzo de 1981, justo a un mes del golpe de Estado, que «no hay derechos del hombre en juego a la hora de cazar el tigre»<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> ESPADA, Arcadi, *Diarios*, Madrid, Espasa, 2002. También DEL AGUILA, Rafael y MONTORO, Ricardo, *El discurso político de la transición española*, Madrid, CIS, 1984.

<sup>65</sup> Citado por extenso en BELLOCH, Santiago, *Interior. Los hechos claves de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo*, Barcelona, Ediciones B, 1998, p. 103.